



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-013-2018-00367-01 (O2-22-172)  
**Accionante:** HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO  
**Accionada:** JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, AFP PROTECCIÓN S.A. y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 0023  
**Asunto:** NULIDAD DICTAMEN PCL

En Medellín, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único 05001-31-05-013-2018-00367-01 (O2-22-172), instaurado por HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO en contra de JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, AFP PROTECCIÓN S.A. y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., con el fin de resolver el Grado Jurisdiccional de Consulta respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 17 de mayo de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

## 1. ANTECEDENTES

El señor HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de las sociedades AFP PROTECCIÓN S.A. y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., así también contra la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ – JNCI y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA - JRCIA, a efectos de que se declare la nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral – PCL números 7193653 del 13 de agosto de 2015 y 53968 del 30 de marzo de 2015, proferidos, en su orden, por las juntas calificadoras mencionadas, para que, en consecuencia, se determine que las patologías de *síndrome de túnel carpiano bilateral, síndrome de manguito rotatorio y bursitis trocanteria derecha, epicondilitis lateral y medial – bilateral* son de origen laboral y dan lugar a una PCL igual al 58,76%; reclamando de la codemandada SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de ese estado.

En respaldo de sus aspiraciones señala que inició a prestar sus servicios a favor de la sociedad OSAKA MP LTDA, hoy, OSAKA S.A.S., a partir del 28 de julio de 2005 y hasta el 22 de enero de 2015, desempeñando actividades de *“amarrar dispositivos con rache manual y neumático, aflojar dispositivo con rache manual y neumático, posturas para hombro, codo, y muñeca en ángulos no confortables, movimiento repetitivo para hombro, codo y muñeca”*, derivando la realización de estas actividades en las patologías de *síndrome de túnel carpiano bilateral, síndrome de manguito rotatorio y bursitis trocanteria derecha*.

Prosigue relatando que el 27 de julio de 2005 y previo a su admisión en la sociedad OSAKA S.A.S., le fue practicado examen ocupacional de ingreso por parte de la sociedad LATOXIN LTDA, la que a través del médico José A. Velásquez determinó que se encontraba apto para laborar, aclarando que en octubre de 2012 la sociedad empleadora, bajo la supervisión de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., en lo sucesivo SURA S.A., realizó estudio de riesgos laborales. Así, señala que el señor John Fredy Franco Bermúdez, profesional en salud ocupacional, afirmó que las circunstancias a las que estaba expuesto el accionante fueron suficientes para causarle la enfermedad. Sostiene que el 29 de abril de 2013, el médico Diego Álvarez Tobón emitió concepto donde se consignó: *“en mi concepto su patología es debida a su laboral, favor referir médico centinela a evaluación”*.

Ahora, en lo que atañe a la calificación de PCL, indicó que SURA S.A. concluyó que las patologías que presentaba eran de origen común, *al no encontrar una relación de causalidad entre las patologías desarrollas (sic) y los factores de riesgos ocupacionales*; origen que fuera

confirmado por la JRCIA y la JNCI en dictámenes del 30 de marzo de 2015 y del 13 de agosto de ese mismo año, respectivamente, valoraciones a las que se opone, de acuerdo con el dictamen del 02 de octubre de 2017 rendido por el médico José William Vargas Arenas aportado como prueba documental y donde se calificó de origen laboral las patologías con un 58,76% de PCL.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 12 de julio de 2018 (pág.595, doc.01, carp.01), y se notificó a las demandadas SURA S.A. el 08 de noviembre del 2018 (pág.603, doc.01, carp.01), AFP PROTECCIÓN S.A. el 22 de marzo de 2019 (págs.886 a 888, doc.01, carp.01), JRCIA el 04 de febrero de 2019 (pág.873, doc.01, carp.01) y JNCI el 24 de septiembre de 2019 (pág.1057, doc.01, carp.01); quienes al unísono se opusieron a las súplicas de la demanda.

De esta manera, SURA S.A., frente a la narración de los hechos de la demanda aceptó como ciertos aquellos que hacen referencia a la existencia de la relación de trabajo entre el demandante y la sociedad Osaka S.A.S. durante el periodo del 28 de julio de 2005 al 22 de enero de 2015, la evaluación del puesto de trabajo y estudio de riesgos dentro de la sociedad Osaka S.A.S., así como el contenido de los dictámenes proferidos por la JRCIA, la JNCI y SURA S.A. En su defensa propuso la excepción dilatoria de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, así como las perentorias que rotuló como inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, falta de nexo causal, dolencias actuales derivadas de enfermedad común, calificación en firme por la entidad competente y ajustada a derecho, ausencia de elementos para decretar la invalidez de los dictámenes emitidos, pago, compensación y prescripción (págs.605 a 681, doc.01, carp.01).

La AFP PROTECCIÓN S.A., luego de aceptar el resultado de los dictámenes dictados por la JRCIA y de la JNCI, presentó las excepciones de fondo que nominó como inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, plena validez de los dictámenes emitidos por las entidades competentes para ello, pago y compensación, buena fe y prescripción (págs.889 a 1042 y 1044 a 1047, doc.01, carp.01)

A su turno, la JRCIA reconoció la veracidad del resultado que arrojaron los dictámenes de PCL practicados al accionante, elevando el medio exceptivo perentorio que denominó, inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones (págs.882 a 885, doc.01, carp.01). Finalmente se tuvo por no contestada la acción judicial a instancia de la JNCI (pág.1148, doc.01, carp.01).

## **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 17 de mayo 2022 (docs.62 y 63, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió absolver a las demandadas AFP PROTECCIÓN S.A., SURA S.A., JNCI y la JRCIA de las pretensiones impetradas en su contra por parte del promotor del juicio, dejando incólume el resultado de los dictámenes expedidos por los organismos calificadores, absteniéndose de gravar en costas al demandante.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de explicar la capacidad demostrativa de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez, de cara a la libre formación del convencimiento que caracteriza el análisis probatorio en esta especialidad (artículos 60 y 61 del CPTSS); determinó que los dictámenes expedidos por la JRCI y la JNCI mantienen su eficacia, al contar con justificaciones o conceptos médicos justificados y criterios jurisprudenciales vigentes de integralidad en la calificación, así como no evidenciar la configuración de errores técnicos en su sustentación. En adición a lo anterior, expuso la sentenciadora de primera instancia que el pretensor no demostró los fundamentos fácticos en que apoyaba sus pedimentos, sino que, por el contrario, el origen común de las patologías que padece aquel está llamado a mantenerse, de acuerdo con el principio de integralidad.

## **1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta**

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue totalmente adversa a los intereses del beneficiario, la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, al no ser objeto de alzada.

## **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El grado jurisdiccional de consulta se admitió el 31 de mayo de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 06 de junio de ese año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 el Decreto Legislativo 806 de 2020 –vigente para la época-, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El procurador judicial del demandante (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se revoque la decisión proferida por el *a quo* y, en su lugar, se acceda a los pedimentos deprecados en la demanda, otorgando así, total validez a lo conceptuado en el dictamen emitido por el médico José William Vargas Arenas, profesional de la medicina idóneo.

En esa dirección, asevera que la sentencia proferida ubicó en una situación de debilidad manifiesta al demandante, al desconocer *el impacto que la repetición de los movimientos que se realizaban en la ejecución de las labores contratadas ocasionó en su estado de salud, específicamente en el diagnóstico de(sic) del maguito rotatorio*. Resalta que si el *a quo* consideraba que la prueba pericial obrante en el proceso no esclarecía los hechos objeto del litigio, podía decretar una prueba de oficio y así dirimir las diferencias resultantes entre el dictamen emitido por el médico José William Vargas Arenas, aportado con la demanda, y el expedido por la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, más aún, si se considera la claridad y fundamentos a los que acudió el primero, para concluir el origen y la PCL de las patologías que padece el pretensor.

Por su parte, el vocero judicial de la demandada SURA S.A. señaló que la sentencia recurrida debe ser confirmada integralmente, dado que, a su juicio, *ha sido clara la jurisprudencia nacional en indicar que la declaratoria de nulidad de los dictámenes, que debe decretarse por un juez laboral, solo procede en dos eventos. a. Si se ha configurado la violación al debido proceso en el proceso de calificación. b. O, Demostrarse las graves falencias que llevaron a conclusiones erradas en la realización de los mismos, en la aplicación equivocada de los manuales únicos de calificación de invalidez*.

Causales de las que, dicho sea de paso, no adolecen los dictámenes expedidos por la JRCIA y la JNCI hoy cuestionados. A posteriori, recalca que la pericia aportada con la demanda y elaborada por el médico José William Vargas Arena, carece de rigor científico al presentar, desde el punto de vista técnico, los siguientes errores:

*Un dictamen que controvierte los postulados del dcto 917 de 1999, 2463 de 2001, ya que NO contiene los fundamentos de hecho y de derecho que deben contener los dictámenes, que no es nada más que la justificación técnica y jurídica de los mismos.*

*El médico reconoció que no contó con la HC completa del demandante.*

*También reconoció que no conoció las fechas y los cargos específicamente desarrollados por el demandante con el fin de establecer la exposición de este al Factor de Riesgo Ocupacional Reconoció que no conoció otro EPT diferente al de 2013.*

*Reconoció que en el demandante hay combinación de dolencias de O Común y Laboral.*

*No pudo siquiera sustentar o “encontrar” de dónde sacó la fecha de estructuración indicada en el dictamen.*

*Tampoco pudo indicar ni recordar de dónde sacó y “valoró” la patología relacionada con la depresión.*

*Cuando se le indagó sobre cuando ha de entenderse que se configura y estructura la invalidez, indicó erróneamente que “en su concepto” -apreciación netamente subjetiva- es cuando aparecen las enfermedades; lo anterior contraría la directriz 001 de 2014 de la Junta Nacional, que claramente indica que para ello, se excluyen etapas iniciales de la enfermedad.*

Aunado a lo anterior, advirtió que en virtud de las dolencias de origen laboral padecidas por el demandante, relacionadas con el Síndrome del Túnel del Carpo, y que fueran calificadas por las Juntas de Calificación en un 23.84% de PCL, mi representada, procedió al reconocimiento y pago de la respectiva Indemnización por pérdida de Capacidad Laboral en los términos de la ley 776 de 2002, por valor de Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos ( \$ 7.475.966), cumpliendo así todas sus obligaciones contractuales y legales, para con ello, insistir en la confirmación de la sentencia impugnada.

## **ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor de HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar la validez de los dictámenes de PCL practicados al demandante y expedidos por la JRCIA y la JNCI, de cara a las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan la materia, para así concluir si debe mantenerse el origen y valor porcentual otorgado por las patologías que padece el actor, o, si por el contrario, se debe acoger la calificación emitida en el dictamen pericial adosado con el libelo genitor, para con ello ordenar a la sociedad SURA S.A., el reconocimiento y pago de la prestación de invalidez de origen laboral anhelada.

### **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión de primer grado, considerando que el deprecante no demostró las falencias reprochadas en la calificación de origen común de las patologías que padece y la calificación porcentual de la PCL otorgada por la JNCI en el dictamen No. 7193653 del 13 de agosto de 2015, modificatorio del dictamen No. 53968 del 30 de marzo de 2015 emanado de la JRCIA, a la vez de que, como resultado del ejercicio de la libre formación del convencimiento en la apreciación de la prueba pericial allegada con la demanda, se desestimó la capacidad demostrativa de esta medio de convicción.

### 2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el señor HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO a la fecha de la presente decisión, alcanzó los 57 años de edad (págs.731 y 732, doc.01, carp.01; docs.02 y 03, carp.01); que la JRCIA en dictamen No. 53968 del 30-03-2015, otorgó por las patologías de manguito rotador, depresión, trastorno dolor crónico somatomorfo, y limitación de movimientos de hombro una PCL igual al 46,93%, de origen común y fijando como fecha de estructuración el 26 de enero de 2015 (págs.586 a 594, 636 a 644, 586 a 594, 806 a 809 y 991 a 994, doc.01, carp.01; docs.02 y 03, carp.01); que la JRCIA en dictamen No. 60245 del 08-07-2016 calificó como de origen común la enfermedad de coxartrosis (pág.670 a 671, 836 a 839 y 1021 a 1024, doc.01, carp.01; docs.02 y 03, carp.01); que la JNCI en dictamen No.

71936535 del 23-10-2014, calificó de origen común la enfermedad del síndrome del manguito rotador y como de origen laboral la epicondilitis (págs.623 a 635, 757 a 770, 942 a 955 y 1088 a 1101, doc.01, carp.01; docs.02 y 03, carp.01); que la JNCI en dictamen No. 7193653 del 13-08-2015, otorgó por las patologías de síndrome del manguito rotador; trastorno dolor persistente somatomorfo, síndrome del túnel carpiano, gastritis y epicondilitis lateral una PCL igual al 52,23%, de origen común y fijando como fecha de estructuración el 26 de enero de 2015 (págs.645 a 652, 810 a 817, 995 a 1002, doc.01, carp.01; docs.02 y 03, carp.01); que la JNCI en dictámenes 60245 y 71936535-17225 del 08-07-2016 y del 30-11-2016, calificó de origen común la afección denominada coxartrosis (págs.672 a 681, 841 a 850, 1026 a 1035, 1102 a 1109, doc.01, carp.01; docs.02 y 03, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que el demandante prestó sus servicios personales a favor de la sociedad OSAKA S.A.S. durante el lapso comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 22 de enero de 2015 (págs.32 a 36, doc.01, carp.01) y que el 16 de agosto de 2013 se elaboró un estudio del puesto de trabajo para definición de riesgo osteomuscular del demandante, describiendo las actividades y sub-actividades ejecutadas por aquel, así como el registro de tiempo laboral promedio en cada una de éstas (págs.52 a 71).

Siendo ello así, memora la Sala que el impulsor de la Litis ubica como punto neurálgico del asunto litigioso, en la calificación del origen y porcentaje de PCL otorgada a las patologías de síndrome de túnel de carpiano bilateral, síndrome de manguito rotador y bursitis trocanterina derecha por la JNCI en el dictamen No. 7193653 fechado 13 de agosto de 2015, asegurando que las anteriores afecciones son de origen laboral al mostrar *“un nexo de causalidad adecuado y directo con las actividades y funciones desarrolladas por el señor HÉCTOR en la sociedad OSAKA S.A.S.”*, acudiendo de manera principal como pilar de sus anhelos, al contenido y alcance de la pericia emitida por el médico José William Vargas Arenas, arrimado con el escrito inaugural.

### **2.3.1 De la Naturaleza Jurídica de las Juntas de Calificación de Invalidez**

De acuerdo con lo normado con el artículo 2.2.5.1.4 del Decreto 1072 de 2015, las juntas calificadoras se definen como organismos integrantes del SGSS y regidas por el derecho privado, contando entre sus funciones principales emitir los dictámenes de PCL, previo estudio del expediente y valoración del paciente<sup>1</sup>, y en ese sentido, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento dentro del SGSS.

---

<sup>1</sup> **Artículo 2.2.5.1.6, Decreto 1072 de 2015.** Son funciones de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, las siguientes: (...) 7. Emitir los dictámenes, previo estudio del expediente y valoración del paciente.



No obstante, los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras no tienen el carácter de inmutable, sino que por el contrario, pueden ser objeto de cuestionamiento ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social<sup>2</sup>, como así lo ha entendido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en decisión SL5694 de 2021<sup>3</sup>.

### 2.3.2 La calificación de la pérdida de capacidad laboral

En lo que respecta a este tópico, es del caso señalar que el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiendo acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, llámese la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguro que asuma los riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, si se presentara disenso frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; aclarando la Sala que, en últimas y como se antelara, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).*

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el citado dictamen “... *no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne*” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062

<sup>2</sup> **Artículo 2.2.5.1.4, Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015.** Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social Integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Por contar las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez con personería jurídica y autonomía técnica y científica y de conformidad con la normatividad vigente, sus integrantes responderán solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado, dentro del proceso promovido ante la justicia laboral ordinaria. PARÁGRAFO 1o. La jurisdicción y competencia que tenga cada junta, podrá coincidir o no con la división política territorial de los respectivos departamentos, distritos o municipios. PARÁGRAFO 2o. Cuando un dictamen de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sea demandado ante la Justicia Laboral Ordinaria se demandará a la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez como organismo del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, y al correspondiente dictamen.

<sup>3</sup> *Por manera que, el juzgador no desconoció la naturaleza de las juntas de calificación de invalidez: (i) que son organismos actuantes dentro del sistema de seguridad social; (ii) que sus decisiones son de carácter obligatorio dentro de ese mismo sistema de seguridad social; (iii) que esas decisiones pueden ser demandadas y controvertidas en la justicia laboral ordinaria; y (iv) que pueden actuar como órgano pericial.*

del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”; puntualizando en sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. -Negritas intencionales de la Sala-

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto “Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías” (CSJ SL del 19-10-2006, radicado 29622, SL-16374 del 04-11-2015, radicado 53986SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez “... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo.

*Recuérdese al efecto que, como lo ha dicho la Corte, “es la propia ley la que a esa función le señala confines, imponiendo el razonamiento del análisis respectivo, así como el deber de considerar la firmeza, la precisión y la calidad de los fundamentos del dictamen y los demás elementos probatorios que obren en el proceso (artículos 187 y 241 del CPC), luego la mencionada autonomía no puede ser convertida en arbitrio por defecto, ya que la actitud del juez, frente a la prueba, jamás podrá ser pasiva sino, muy al contrario, dinámica, activa y acuciosa” (CSJ SC-Sentencia del 02 de agosto de 2002, radicación 6148).*

*El estudio de la contradicción de la prueba por error grave se justifica en aquellos casos en que aparezca con notoriedad que el perito no aplicó su propio discernimiento, omitió o utilizó reglas distintas del conocimiento, no vio, supuso o cercenó la materia del dictamen” (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).*

#### **2.3.4 Del Caso Concreto**

Revisado entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, puede afirmar esta Sala de Decisión, sin ambages, que la decisión adoptada por la juzgadora de instancia se estima acertada, toda vez que, según los principios que informan la sana crítica, concluyó la pertinencia e idoneidad del dictamen fustigado expedido por la JNCI, de acuerdo con los demás medios de prueba practicados y estimando aspectos tan trascendentales como necesarios, en lo atinente a **i.** la acreditación del profesional, entiéndase, el grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad; **ii.** los procedimientos, estándares o métodos científicos utilizados para la valoración; **iii.** el insumo o elementos materiales a los que se acudió para emitir el concepto solicitado, y; **iv.** las condiciones en que fue valorado el estado de salud del paciente.

Como sustento de lo anterior, en el acontecer judicial se ordenó, a solicitud de la parte actora, la práctica de una tercera prueba pericial, esta vez, a cargo de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en la que el Médico Especialista en Salud Ocupacional Jaime León Londoño Pimienta, luego de coincidir con las conclusiones a las que llegó la JNCI y de cuantificar la PCL en un 52,69%, sostuvo respecto del estado de salud del demandante lo siguiente:

*Paciente en la sexta década de la vida, con múltiples comorbilidades por desórdenes osteomusculares, algunos de ellos calificados como de origen laboral. Se conceptúa que el Síndrome de Manguito Rotatorio y la Coxalgia, son de origen común, aunque en su puesto de trabajo, como se describe en las calificaciones especialmente de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, existen factores de riesgos que generan desórdenes músculo esqueléticos, no se evidencia que los codos y las caderas estén comprometidos en forma importante, a estas patologías se suman, los trastornos neuróticos o del estrés y dolor crónico,*

*y los trastornos gastrointestinales que también son de origen común. El paciente tiene múltiples calificaciones de pérdida de capacidad laboral, actualmente está pensionado por el Fondo de Pensiones. Se toma como fecha de estructuración la valoración del Instituto Colombiano del Dolor – Incodol del 6/02/2015. Se hizo calificación integral de sus patologías activas y/o con secuelas.*

De esta manera en vista pública el profesional de la medicina respondió de manera concreta los cuestionamientos que fueran elevados por la falladora de instancia y por las partes integrantes de la litis. En este contexto, explicó el médico Londoño Pimiento que cuenta con 20 años de experiencia en el área de salud ocupacional y por lo tanto de acuerdo con su experticia calificó de manera integral las dolencias que padece el señor HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO, afirmando que en atención a la historia clínica y los documentos aportados al cartulario, como lo es, el estudio de puesto de trabajo, encontró que según los parámetros fijados con el Decreto 917 de 1999, el deprecante sufre de enfermedades laborales como lo son el síndrome del túnel carpiano y la epicondilitis.

Adicional a ello, también identificó que aquel padece de ansiedad y depresión, así también de enfermedades crónicas y degenerativas de origen común. Al momento en que se le indagó las razones para ubicar el origen común de estas últimas afecciones, señaló que no estaban implicadas en las tareas que día a día ejecutaba al tenor del estudio de puesto de trabajo, del cual también esclareció su relevancia para la valoración del paciente, pues este insumo, a diferencia de lo que pueda exponer el paciente en una entrevista, es elaborado por una persona calificada que analiza, describe y determina aspectos de movilidad, manejo de cargas y demás riesgos al que se ve expuesto el trabajador en la labor desempeñada.

De igual manera, fue enfático en señalar que no tuvo una entrevista con el demandante, por motivo de ausencia de un protocolo o autorización por parte la Universidad de Antioquia para estos fines, a lo que se aúna, las restricciones y el cuidado para evitar el contagio de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Prosigue cogitando que la ansiedad y la depresión son consecuencia directa del dolor crónico que padece el pretensor, al propio tiempo de recalcar que es el resultado de las patologías osteomusculares que ubica al paciente en un estado de angustia y depresión.

Expuso entonces que se evidencia un dolor generalizado que cuenta con varios puntos gatillo o timbres que puedan estar en cadera o muñeca, y que no se encuentran exclusivamente relacionado con la epicondilitis diagnosticada. Frente al peso porcentual de cada patología, afirmó que el mismo está definido en el Manual de Calificación de Invalidez que fuera utilizado en la valoración; aclarando que dentro de los documentos revisados no figura elemento de

prueba que permita desvirtuar el contenido y las conclusiones que fueran consignadas en el estudio de puesto de trabajo del promotor (minuto 43:06 a 01:39:57, doc.64, carp.01).

Por su parte, rememora la Sala que, el dictamen en que se apoyan las aspiraciones del accionante fue elaborado por el también médico especialista en medicina laboral y salud ocupacional, profesional de la medicina José William Vargas Arenas, quien detalló que se apartó *de los dictámenes emitidos por la ARL Sura y Juntas(sic) Regional(sic) y Nacional de calificación de invalidez, ya que tanto por aspectos epidemiológicos de la actividad realizada por el trabajador, como de sustentación del respectivo estudio de puesto de trabajo y de aspectos biomecánicos, es evidente que el paciente ha laborado con exposición a riesgo ergonómico de postura, movimiento y carga por encima de límites no aconsejables para los segmentos hombro, codo y muñeca y capaces de producir patología por sobreuso osteomuscular y durante largo tiempo por lo cual considero que no sólo (sic) sus patologías de codo y muñeca si no (sic) igualmente la patología de hombro, son de origen laboral. Incluso como se evidencia en la historia clínica es la patología de hombro la patología inicial y las demás (codo y muñeca) que aparecieron luego y son las que posteriormente llevaron a la invalidez del paciente; fijando entonces como de origen laboral las patologías de síndrome de manguito rotatorio bilateral, epicondilitis medial lateral bilateral y bursitis trocantérica derecha, con fecha de estructuración del 29 de mayo de 2012 y con una PCL igual al 58,76%, refutándose así con esta valoración, además del origen del estado de invalidez, la cuantificación y su fecha de estructuración.*

Ahora, en diligencia de sustentación del dictamen pericial el profesional de la medicina afirmó que su experiencia en la práctica de experticias de esta naturaleza data desde el año 1993, cuando ingresó a la División de Riesgos Laborales del entonces Instituto de Seguros Sociales – ISS, expidiendo el dictamen arriba relacionado por solicitud del demandante y adoptando el método consignado en el Decreto 917 de 1999.

Adujo como elementos a los que acudió para la determinación del estado de invalidez y el origen del mismo, la interpretación del estudio del puesto de trabajo efectuado en el año 2013, así como el dictamen controvertido y la historia clínica. Del mismo modo, acudió a sus conocimientos y experiencia en riesgo ergonómico y en la actividad que desarrolla el trabajador. Anota que estuvo de acuerdo con el porcentaje de PCL otorgado por la JNCI, justificando la diferencia resultante en la inclusión de la patología de bursitis trocantérica derecha. Afirma que en la época de la vigencia del Decreto 917 de 1999 no se hablaba del concepto de calificación integral y la suma de todas las patologías que padece una persona arroja la PCL. No obstante, al momento en que se le indagó por la evidencia que tuvo en cuenta

para la identificación del hito de la estructuración de la invalidez, aseveró que no encontró la nota respectiva en la historia clínica aportada al expediente, no recordando tampoco el contenido de la misma. De igual manera fue iterativo en indicar que la historia clínica que milita en el expediente no se encontraba completa. Al momento que se le requiere para que relacione los estudios epidemiológicos de la industria a los que acudió para sustentar el dictamen, expresó que no los identificó puntualmente en el documento pues el dictamen no tenía ese objeto, informando de manera genérica que se refería a los que habían elaborado las administradoras de riesgos laborales. Adicional, sostuvo que en la pericia no se hace referencia a los demás dictámenes practicados por las juntas calificadoras, como quiera que aquellos son parciales y no son el motivo de la calificación; agregando que no indagó por la existencia de un estudio de puesto de trabajo anterior al año 2013, por cuanto resultaba innecesario y debido la carga administrativa que comporta la consecución de esta documental, en consideración a que su valoración es integral (minuto 01:40:16 a 03:14:14, doc.64, carp.01).

Bajo esta perspectiva, se tiene que el compendio normativo llamado a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, que enseña:

*“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.*

Significa lo anterior, que el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial, se encuentra determinado por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en el dictamen No. 7193653 del 13-08-2015 expedido por la JNCI, hoy cuestionado. Ello en atención a que ningún elemento de prueba tuvo la entidad suficiente para derribar los pilares sobre los cuales descansa esta valoración, al punto que el médico José William Vargas Arenas no justificó con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, el documento o cualquier otro instrumento al que acudió para fijar la fecha de estructuración del estado de invalidez, y aun el origen laboral de las dolencias que aquejan a HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO, resultando inadmisibles, dada la experiencia y calidades del profesional de la medicina, justificar esta omisión en su falta de memoria para tan sensible punto de la controversia, pues por el contrario, debe comparecer a estos actos con pleno conocimiento del tema por discutir. Así mismo, es de recalcar que no

aportó o siquiera mencionó los criterios, a criterio de esta Sala de Decisión, que guiaron su valoración, como lo son los estudios epidemiológicos de la industria tenidos en cuenta; profundas falencias que no permiten provocar en el juzgador el grado de convicción suficiente para apartarse de lo dictaminado por el grupo interdisciplinario adscrito a la JNCI y con ello dispensar de manera favorable los pedimentos.

Bajo este presupuesto irrefutable, no merece reparo alguno el ejercicio conclusivo vertido en la decisión hoy revisada, pues en la misma se plasmó de manera racional, con arreglo a lo autorizado por los artículos 60 y 61 del CPTSS, los motivos por los que se desestimó el contenido del dictamen pericial adosado con la demanda, los que dicho sea de paso, también comparte la Sala, sin que la insistencia del demandante en acceder a sus pedimentos con inadmisiblemente ligereza, sea directriz para variar lo que aquí se discurrió.

Importa acotar que la observación del actor frente al decreto de una prueba de oficio en la primera instancia para la práctica de un cuarto dictamen pericial, desconoce el carácter discrecional de la juzgadora, toda vez que, si bien el juez está facultado para el decreto de pruebas de oficio, su práctica debe estar orientada al completo esclarecimiento de los hechos controvertidos. De ahí que, al encontrarse fundada la decisión absolutoria en privilegiar la pericia que le mereció mayor credibilidad, previo ejercicio de contrastación y análisis crítico, el yerro enrostrado es infundado.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió a las demandadas JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, AFP PROTECCIÓN S.A. y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte del señor HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO.

## 2. COSTAS

Teniendo en cuenta que la decisión de primer grado fue revisada en el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO, no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**3. RESUELVE**


**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 17 de mayo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por HÉCTOR LEÓN DEOSSA RESTREPO, en contra de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, la AFP PROTECCIÓN S.A. y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

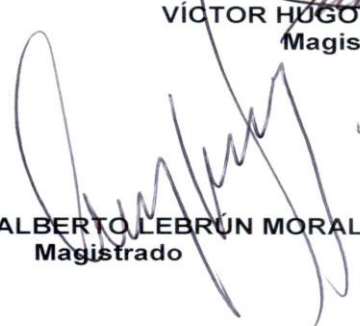
**SEGUNDO:** SIN COSTAS en esta instancia.


Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.


Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente

  
**CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES**  
Magistrado

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**  
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario